

# **Las nuevas FFAA salvadoreñas. Un obstáculo para la democratización**

Mario Lungo

---

Mario Lungo: Sociólogo salvadoreño.

---

*Este trabajo parte de la siguiente premisa, que aunque obvia, consideramos necesario reiterar: en El Salvador las fuerzas armadas han constituido históricamente la base del poder "oligárquico", cuya expresión al nivel de la forma del Estado ha sido casi permanentemente la dictadura militar. En este contexto, la relación entre fuerzas armadas y democracia ha sido necesariamente antagónica, y las innumerables ocasiones en que los militares han hablado de democracia, de un regreso a ella, de recuperar lo "perdido" se ha tratado en casi todos es tos pronunciamientos (como generalmente han llamado los militares en el país a los golpes militares), de un discurso formal que esconde otras finalidades. Es cierto que podemos encontrar momentos de una búsqueda real de la democracia (pensamos por ejemplo en 1944 ó 1979, sin que estos ejemplos citados agoten estos momentos ya que el objetivo de este trabajo no es el análisis de los mismos), pero ellos son a la vez demostrativos de que la estructura constitutiva de las fuerzas armadas salvadoreñas ha sido históricamente antagónica a la construcción de la democracia en el país.*

*A partir de 1981, con el inicio en el país de una guerra popular revolucionaria bajo una forma abierta, las fuerzas armadas salvadoreñas comienzan a sufrir modificaciones de orden cualitativo y cuantitativo que, cinco años después, han conformado un ejército sustancialmente diferente a aquel que iniciara la guerra contra el FMLN en 1981. Sobre las características de estas "nuevas fuerzas armadas"*

***salvadoreñas y porque ellas constituyen un nuevo obstáculo para el establecimiento de la democracia en el país tratan las siguientes páginas.***

Las modificaciones que a partir de 1981 se implementan en el ejército salvadoreño tenían por objetivo central su readecuación para poder desarrollar las tácticas operativas capaces de enfrentar las modalidades de lucha impulsadas por la guerrilla revolucionaria. Estas tácticas operativas que serían aportadas por los asesores norteamericanos, recogían básicamente la experiencia de la derrota en Vietnam y el replanteamiento estratégico global hecho a partir de la administración de Cáster. Pero la capacidad de desarrollar las nuevas modalidades tácticas exigirán modificaciones en la estructura de las fuerzas armadas que tendrán consecuencias mas allá de las actividades estrictamente militares.

Es hacia mediados de 1983 que las tropas salvadoreñas logran comenzar a implementar estas nuevas modalidades tácticas, las que parecieran haber alcanzado sus niveles máximos durante 1985, y que fueron impuestas paulatinamente, y no sin serias contradicciones, por los asesores norteamericanos. Este cambio del tradicional planteamiento táctico de un ejército regular, poco adecuado a las condiciones de una guerra irregular revolucionaria, se da dentro de la opción estratégica escogida por la administración Reagan, luego del inicio de la guerra en su forma abierta en 1981, y que puede sintetizarse, en el plano militar, en el aniquilamiento de las fuerzas militares revolucionarias contando sólo con el ejército salvadoreño sin necesidad de una intervención masiva directa de tropas norteamericanas (lo que no excluía la necesidad de preparar esta intervención si ella se revelaba necesaria, plan que podemos considerar ya preparado en este momento, pero que tiene implicaciones políticas de alto costo).

### **MODIFICACIONES ESTRUCTURALES**

La nueva táctica contrarrevolucionaria exigía modificaciones estructurales en cuatro componentes básicos de todo ejército: el armamento, la estructura de las unidades de tropa, la estructura de mando, y las modalidades táctico-operativas en sentido estricto.

Durante 1981 se cumplen casi en su totalidad las modificaciones en el primero de los cuatro componentes. El fusil M-16 norteamericano sustituye al G-3 alemán (de mayor calibre, más peso y que exige gran mantenimiento ya que esta diseñado para ejércitos regulares), se introduce masivamente el lanzagranadas M-79, el cañón portátil de 90 milímetros y la ametralladora liviana M-60; los aviones A-37B, de eficiencia comprobada en Vietnam sustituyen a los aviones FOUGA y OURAGAN, muy poco útiles contra las fuerzas guerrilleras. Estos cambios incidirán inmediatamente en la estructura de las unidades de tropa y de mando ya que su correcta utilización así lo requiere.

Por eso es que también desde 1981 se inicia la modificación de las unidades al interior de las tropas gubernamentales, apareciendo la primera brigada elide móvil: la ATLCATL.

Posteriormente, en 1982, se crean los batallones BELLOSO (entrenado en los Estados Unidos), y ATONAL, y en 1983 los batallones ARCE (entrenado en Honduras), y BRACAMONTE. Este mismo año se inicia el despliegue de los llamados batallones de "cazadores", unidades cuyo nombre depende de la brigada que les da origen, ya que al contrario de los primeros, ellos sí dependen de una jefatura de brigada determinada. Estas modificaciones buscan crear unidades móviles no fijadas a determinada circunscripción territorial y disminuir su tamaño para adecuarlas al carácter irregular de la guerra que se estaba desarrollando.

Lograr la modificación en este segundo componente constituyó para los asesores militares norteamericanos una cuestión difícil por tres razones: la primera, que esto exigía un sustancial incremento en el número de tropas operativas, lo que no era fácil de lograr rápidamente por las dificultades en el reclutamiento y el alto número de bajas causadas por el FMLN; la segunda era que esto exigía también un importante aumento en el número de oficiales en un momento que su número disminuía debido a las bajas de oficiales sufridas durante los combates; la tercera era que esto incidía en la estructura de mando de las fuerzas armadas.

En efecto, la reestructuración del mando fue difícil de lograr, y continúa generando contradicciones, para poder implementar a cabalidad la nueva táctica militar. Modificar la estructura de mando implicaba afectar el poder y los privilegios de la "tanda", que es como se conoce dentro de las fuerzas armadas salvadoreñas al grupo de oficiales de la misma promoción, y que generalmente como grupo asumían por un determinado período (casi siempre coincidente con el presidencial), los puestos de mayor importancia dentro del aparato estatal. Los miembros de cada "tanda" asumían a la vez las comandancias de las brigadas del ejército, dislocadas antes de 1981 territorialmente en número de cinco, y las jefaturas de los cuerpos de seguridad pública. Si a partir del golpe militar del 15 de octubre de 1979, las posiciones de los militares del alto mando en la cúspide del aparato gubernamental civil fue cuestionada como no lo había sido desde 1932, la necesaria modificación en la estructura de las unidades de tropa ponía en duda el control, por parte de la "tanda" del conjunto de las fuerzas armadas mismas en un momento en que las contradicciones políticas en el interior de la oficialidad habían alcanzado niveles máximos por la constitución de una tendencia claramente reformista encabezada por el coronel Adolfo Majano.

Debemos también explicar que en el caso salvadoreño, antes de estas reestructuraciones, un comandante de brigada tenía, en la circunscripción territorial que dirigía, mucho más que el poder estrictamente militar. Este trascendía al ámbito político, constituyendo el comandante militar el verdadero poder político, muy sobre los gobernadores departamentales y los alcaldes, en este segundo nivel de la estructura gubernamental, trenzando así las peculiares bases

del poder "oligárquico" en El Salvador. Fácil es entonces imaginarse que, pasada la euforia de la novedad, la existencia de unidades de tropa operativas sin ubicación territorial fija, dependientes directamente del Estado Mayor, con más alto nivel de capacitación militar, y que poco a poco fueron ocupando el papel "estelar" en la guerra contra el FMLN, generara numerosas e importantes contradicciones. La brigada ATACATL y el coronel Domingo Monterrosa (recientemente fallecido en combate contra las fuerzas guerrilleras), son el mejor ejemplo del "nuevo" poder dentro de esta reestructuración militar. La insubordinación premiada del coronel Sigifredo Ochoa contra el ministro de la Defensa general Guillermo García a inicios de 1983, la importancia del general Bustillo, jefe de la fuerza aérea (arma anteriormente de poco peso dentro del alto mando castrense), mostraron que no pocas cosas habían cambiado dentro de las fuerzas armadas salvadoreñas.

### **CRISIS DE HEGEMONIA**

Todas estas transformaciones en el poder militar cobran mayor importancia si recordamos que en el país las clases dominantes no han permitido nunca el acceso de los oficiales militares a la propiedad sustantiva de los medios de producción, limitándolos a ganancias marginales a través del contrabando y otros negocios sucios (los pocos casos, en que tampoco los oficiales involucrados han logrado insertarse completamente dentro de los circuitos centrales de acumulación, aunque lograran obtener una riqueza no despreciable, confirman en nuestra opinión esta tendencia histórica). Por eso es que para la oficialidad, el período en que su "tanda" está en la cúspide del poder militar, es el momento para enriquecerse y alcanzar el mayor status social.

Para los asesores norteamericanos era claro que las comandancias departamentales de brigada no eran adecuadas a la irregularidad y movilidad de la guerra revolucionaria, pero el proceso de reestructuración del mando ha sido muy difícil y accidentado, y sólo el hecho de ir perdiendo la guerra logró convencer a una oficialidad corrupta e ineficiente.

Pero esta falta de cohesión en el alto mando, que aún persiste aunque esté temporalmente controlada por el peso de dirección introducido por los asesores, tiene raíces que desbordan los simples problemas derivados de contradicciones entre las "tandas" y aún entre las diferentes tendencias políticas existentes en el interior de las fuerzas armadas, y que van más allá de las diferencias sobre la táctica militar a aplicar contra las fuerzas revolucionarias. Estas fuentes de contradicción existen, pero la razón fundamental de la descohesión permanente está en la profunda crisis de hegemonía de las clases dominantes en el país, lo que impide que se imponga un único y coherente proyecto político hasta este momento. Este problema de fondo de la formación social salvadoreña actual, invade a todos los aparatos del Estado, incluidas las fuerzas armadas. Dadas las pocas perspectivas de una solución de esta crisis, la que se debate en el contexto de una guerra popular revolucionaria, cualquier recomposición del alto mando sólo soluciona temporalmente este problema de cohesión.

El cuarto componente de esta reestructuración, la modificación de las modalidades táctico-operativas, exigía al menos cumplir en buena medida las tres anteriores, además de un crecimiento y adiestramiento continuo de soldados y oficiales (reduciéndose incluso para los últimos el tradicional tiempo de cuatro años que permanecían en la antigua escuela militar y modificándose radicalmente su contenido, lo que obviamente modifica las concepciones sobre su papel en la sociedad). Por eso es que sólo a mediados de 1983 pueden estas nuevas modalidades táctico-operativas comenzar a desplegarse, lo que introduce a su vez nuevos cambios en el seno de la oficialidad y las fuerzas armadas en su conjunto.

En efecto, no estamos ya ante el tradicional oficial (más "barrigón" a medida que ascendía en el escalafón militar, por lo general), que dedicaba casi todo su tiempo a ingeniar las más diversas formas de enriquecimiento, que ejercía su profesión casi siempre bajo la forma de ordenar acciones represivas, que en los momentos de agotamiento del gobierno de turno o ante la inminencia de las elecciones presidenciales ocupaba parte de su tiempo en la conspiración política, en síntesis, ante el oficial tradicional preparado para dirigir una guerra regular y que posiblemente nunca le tocaría dirigir. Estamos hoy ante un nuevo oficial cuyo pensamiento está dedicado fundamentalmente a la conducción de operaciones de guerra interna, permanentemente movilizado en términos de tiempo y espacio, separado de su familia y a la vez preocupado por la seguridad de ella, ya que puede ser blanco incidental o expreso de esta situación de guerra, que valora a sus compañeros no en términos de las ventajas y desventajas por la pertenencia a una determinada "tanda" sino por su actitud y su acción frente a la guerra que libran, que mira a sus superiores y subordinados con esta nueva óptica...

Y esto, obviamente, transforma su concepción de su papel en la sociedad salvadoreña actual y, por este camino, va surgiendo **una nueva relación entre fuerzas armadas y democracia.**

Podríamos afirmar que, con respecto a las décadas anteriores a los años 80, las fuerzas armadas salvadoreñas se han "desnacionalizado", que se han "norteamericanizado". Sería interesante, aunque no es posible hacerlo aquí, desarrollar un análisis comparativo entre las fuerzas armadas salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas sobre este aspecto. Son varias las ocasiones en que personeros del alto mando guatemalteco han hablado de su independencia respecto a la asesoría norteamericana, criticando el peso de ésta sobre las fuerzas armadas salvadoreñas, y atribuyendo a esto una de las principales causas por las cuales éstas no han podido derrotar al FMLN, mientras que ellos sí han logrado neutralizar sensiblemente a la guerrilla guatemalteca. En cinco años las fuerzas armadas salvadoreñas pasaron de tener un carácter regular a tener un carácter contrainsurgente. De ejercer directamente los puestos más altos del aparato gubernamental a jugar un papel estrictamente militar y de apoyo al gobierno demócrata cristiano y este cambio cualitativo ha logrado mediatizar las agudas contradicciones internas que estallaron en 1979.

## LA "DEMOCRATIZACION" DEL PAIS

Hemos esbozado en las líneas anteriores las transformaciones operadas en las fuerzas armadas salvadoreñas básicamente entre 1981 y 1984. En ellas, en nuestra opinión, son más importantes los cambios cualitativos que el crecimiento cuantitativo, específicamente el aumento de efectivos que se ha prácticamente triplicado, y que es lo que ha llamado la atención de la mayoría de los observadores del proceso revolucionario salvadoreño. Son estos cambios cualitativos los que nos permitirán reafirmar, más adelante, que la relación entre fuerzas armadas y democracia sigue siendo antagónica en este momento en El Salvador. Pero para fundamentar nuestra afirmación debemos detenernos algunos momentos en analizar las características de la pretendida "democratización" que vive en estos tiempos el país.

Esta "democratización", impulsada ante todo por la administración norteamericana como fuerza externa, y la democracia cristiana como fuerza interna (y en la que el papel de las fuerzas armadas pareciera secundario en la medida que su tarea central es el aniquilamiento militar de las fuerzas revolucionarias), se reduce esencialmente a la instalación de un gobierno civil "democráticamente electo", como contrapartida política al eje central de la estrategia contrainsurgente: la derrota militar del FMLN. Observemos rápidamente qué objetivos se buscaba alcanzar con las elecciones de 1982, 1984 y 1985.

Hemos abordado este análisis con mayor amplitud en un trabajo que obviamente no podemos citar aquí, por lo que nos limitaremos a extraer las principales conclusiones del mismo. El 28 de marzo de 1982 se realizaron elecciones nacionales para integrar la Asamblea Constituyente que redactaría la nueva constitución política del país. Ese proceso dejó una clara lección: **Las elecciones no solucionaron la crisis de hegemonía en el bloque dominante, y por lo mismo no resolvieron la crisis global de hegemonía en el conjunto de la formación social salvadoreña.** En dichas elecciones, que no tuvieron carácter nacional al limitarse la participación al espectro de partidos políticos que iban desde el centro-derecha (representado por la democracia cristiana), hasta la extrema derecha (representada por ARENA), se enfrentaron dos proyectos: el que sumaba al aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias una serie de medidas de corte reformista, expresión de los intereses predominantes en la administración norteamericana impuestos a través de la alianza PDC-fuerzas armadas, y el proyecto que, a la misma intención de aniquilar a las fuerzas revolucionarias, se sumaba el deseo de volver al mismo esquema político-económico oligárquico vigente antes del 15 de octubre de 1979, y que era impulsado por el resto de partidos políticos derechistas encabezados por ARENA.

Las elecciones del 28 de marzo de 1982 fueron el último intento por dar validez, a través del mecanismo electoral, a una estrategia reformista burguesa, sólo que esta vez impulsada por la administración norteamericana apoyándose en el PDC, como

complemento del eje central de aniquilamiento militar; este intento buscaba, ante todo, imponer una nueva hegemonía recomponiendo el bloque dominante alrededor de la democracia cristiana como alternativa a la hegemonía "oligárquica" en crisis, por eso las elecciones excluían a la izquierda y no podían tener un carácter nacional verdadero, a pesar de las demagógicas llamadas a los grupos democráticos y revolucionarios para que participaran en este evento. De allí también la profunda falsedad de sus intenciones democratizadoras.

A estas características debemos sumarles las condiciones de guerra popular revolucionaria imperantes que impedían la existencia de condiciones mínimas indispensables para cumplir con su limitado objetivo. Las elecciones se realizaron sin embargo, a pesar del equivocado esfuerzo del FMLN por frustrarlas, y aunque no solucionaron la crisis de hegemonía en el bloque dominante, y por lo tanto no podían constituir una alternativa a la guerra popular revolucionaria, mostraron que muchas cosas habían cambiado en el panorama político del país. Destaquemos tres fenómenos: primero, la construcción de un verdadero partido político burgués, inexistente desde los años 20 (ARENA); segundo, la recomposición y resurgimiento del antiguo partido oficial de los militares y la burocracia (el Partido de Conciliación Nacional); tercero, el avance de la guerra revolucionaria y del FMLN-FDR.

A partir de mayo de 1982, la historia del llamado "gobierno de unidad nacional" de Alvaro Magana es así, ante todo, un cumulo de peleas intestinas que no pudieron ser resueltas a pesar de la "bien intencionada" intervención de los sucesivos embajadores norteamericanos. Hay de nuevo que recurrir a las elecciones para tratar de solucionar la crisis de hegemonía en el seno de las clases dominantes, las que se celebran en dos vueltas: el 28 de marzo y el 6 de mayo de 1984. Es claro además que, aparte de pretender solucionar esta crisis, las elecciones se enmarcan dentro de la estrategia que preveía la culminación de este proceso "democratizador" con la elección directa del Presidente de la República. Se dan las elecciones. Se conocen los resultados. Y los acontecimientos posteriores confirmarán que nuevamente el mecanismo electoral no soluciona las contradicciones existentes en el bloque dominante, por lo que al no emerger una hegemonía más clara en el seno de él, el margen de independencia de Duarte sería mínimo (de allí las dificultades del gobierno para maniobrar con el diálogo con el FMLN-FDR y el funeral casi definitivo de sus veleidades reformistas.

**Una cuestión sigue siendo clara: la solución de las contradicciones internas de las clases dominantes, la solución de la crisis de hegemonía al interior de su bloque, sólo es posible previa derrota del movimiento revolucionario salvadoreño.**

Debemos ser, sin embargo, más finos en el análisis. Aparte de este objetivo central de reconstitución hegemónica, las elecciones de 1982 y 1984 perseguían otros dos objetivos al menos: uno, el establecimiento de un gobierno "democráticamente electo", "legítimo", que pudiera dar cobertura a una intervención masiva y directa si ello fuera necesario (a la vez que restaba credibilidad a la alternativa

revolucionaria); dos, contribuir a la reconstitución de la hegemonía norteamericana a nivel mundial. Ambos objetivos han sido parcialmente logrados y esto debe ser tomado en cuenta.

Ambas elecciones eludieron y dejaron intacto, sin embargo, el problema central del país: la existencia de una guerra popular revolucionaria, y esto marca desde ya los límites de su contenido "democratizador". Y podemos decir que estamos ante un esquema ligeramente modificado del pacto que, en 1980, establecieron la democracia cristiana y las fuerzas armadas bajo el patrocinio norteamericano, lo que no ha logrado mediatizar al movimiento popular de masas cuyo reactivamiento desde inicios de 1984 bajo nuevas formas, ha sorprendido al bloque dominante, mostrando el carácter efímero de la manipulación electoral cuando existe una alternativa política popular y revolucionaria.

En 1985, el 17 de marzo, se desarrolla la etapa final del esquema electoral diseñado por la administración norteamericana en asociación, no exenta de agudas contradicciones, con las clases dominantes locales y las fuerzas armadas. Una rápida revisión de lo ocurrido durante el segundo semestre de 1984, permite observar que se estaba repitiendo mucho de lo sucedido durante el anterior gobierno de Magaña: una persistente disputa entre el proyecto representado por Duarte y el proyecto de restauración "oligárquica". Por eso es que a la democracia cristiana, más que incorporar a las fuerzas democráticas y revolucionarias a este proceso electoral, le interesaba captar aquellos votos que pudieran irse hacia la izquierda, ya que era la única posibilidad de obtener la mayoría en la nueva asamblea legislativa y el control de las principales municipalidades del país. De no lograr esto, la marcha de su proyecto (visualizado por ellos a mediano plazo en sus objetivos aún reformistas y "democratizadores"), corría el riesgo de desvirtuarse rápidamente. Se buscaría esta tercera ocasión, definir una hegemonía que aunque no fuera total y permanente a causa de la guerra, permitiera al gobierno de Duarte, y a través de él a la administración norteamericana, impulsar sus planes sin los tropiezos que habían azotado la gestión de los meses precedentes.

Alrededor de estas elecciones giraron dos contradicciones esenciales que habían estado presentes en las anteriores de 1982 y 1984: el desarrollo de una guerra popular revolucionaria cada día más profunda, y la irresuelta crisis de hegemonía en el bloque dominante. A ellas se sumó una nueva: la existencia de un proceso de diálogo que suscitó controversias en las clases dominantes porque implicaba un reconocimiento tácito del FMLN-FDR, y que había despertado profundas esperanzas en el pueblo salvadoreño. Todo esto incidirá en los resultados de las elecciones de 1985 que dieron la mayoría en la nueva asamblea legislativa a la democracia cristiana y provocaron rupturas en el principal partido burgués de El Salvador.

Es en este marco que se dan las transformaciones en las fuerzas armadas, señaladas en el punto anterior. Es su mutua relación y la comparación con las recientes experiencias en países de América del Sur, lo que nos permitirá fundamentar la

tesis que hemos venido sosteniendo.

### **LAS NUEVAS FFAA OBSTACULIZAN LA DEMOCRACIA**

Durante los dos últimos años han ocurrido importantes cambios en varios países de América del Sur. Cúpulas militares como la argentina, la uruguaya y la brasileña se han visto obligada a replegarse del gobierno luego de largo tiempo de justificar su papel por los peligros de la subversión, la incapacidad de los partidos políticos tradicionales, la debilidad de los civiles, etc. Corren aires efectivamente renovadores en el sur, y esto ha conducido a extrapolar situaciones. Se ha comenzado a hablar en Centroamérica de progresos "democratizadores" asimilándolos mecánicamente a lo ocurrido en los países australes. Dos cosas se han olvidado sin embargo, y de singular importancia: la primera es que en El Salvador o Guatemala, **no hemos asistido a una derrota estratégica de las fuerzas revolucionarias**; la segunda es que en estos países no se trata de volver a, o recuperar la democracia liberal burguesa perdida, pues ella no ha existido desde hace largo tiempo. No tener presente estos rasgos claves puede conducir a desfigurar la relación fuerzas armadas-democracia y extraer peligrosas conclusiones.

Hemos analizado rápidamente los cambios en la estructura militar. Hemos visto el contexto político interno en que estos se han desarrollado. Tratemos ahora de comprender cuál es la relación entre las nuevas fuerzas armadas salvadoreñas y la democracia. Veamos para ello cual es el proyecto político que apoyan estas fuerzas armadas. Creemos que la respuesta es clara: ante los dos proyectos políticos planteados en El Salvador de 1985, el proyecto de las clases dominantes y el proyecto democrático-revolucionario, ellas se inclinan definitivamente por el primero, cuyo contenido, más allá del discurso ideológico es profundamente antidemocrático (partimos aquí de que la diferencia entre los proyectos del binomio democracia cristiana-administración norteamericana y de restauración "oligárquica", es de grado no de esencia, y pueden englobarse en un solo polo, y de que las fuerzas armadas, por sus características estructurales de clase no pueden tener un proyecto propio, y que se inclinan generalmente, a favor del de las clases dominantes). Como decíamos antes, las fuerzas armadas salvadoreñas han pasado de estar bajo una dependencia "oligárquica" a estar bajo una dependencia norteamericana, asumiendo las formas más desarrolladas de la ideología de la "seguridad nacional".

No podemos olvidar tampoco la enorme historia represiva y criminal de la oficialidad salvadoreña, y como ha interiorizado su justificación en la tropa que es la ejecutora directa de estas acciones. Su incapacidad para derrotar al FMLN en la guerra actual sólo ha provocado modificación es en esta trayectoria, pasando de la represión directa a la represión oculta a través de los "escuadrones de la muerte", de la masacre de manifestaciones y huelgas al bombardeo de la población campesina. Mientras no modifique esta actitud y las concepciones ideológicas que la sustentan, y de la que participa la mayoría de la actual oficialidad (incluidos

algunos antiguos partidarios del coronel Majano), mal podría pensarse en una contribución de las fuerzas armadas salvadoreñas a la democratización del país.

Por eso es, afirmamos, que en este sentido: **las nuevas fuerzas armadas que se han constituido en El Salvador durante los últimos cinco años también constituyen un obstáculo para la democracia en el país.** Y podríamos ampliar esta afirmación diciendo que, luego de la voluntad intervencionista de la actual administración norteamericana, es quizás el obstáculo más importante, y que las fuerzas armadas salvadoreñas que realmente pueden contribuir a construir una verdadera democracia en El Salvador (y no la antigua democracia formal), serán aquellas que nazcan en la larga lucha de las masas populares salvadoreñas.